

de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejía*.—*Francisco Briseño*.

Es copia que certifico. Pachuca, Julio 12 de 1873.—*Francisco Briseño*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 7 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 29 de Marzo próximo pasado, promovió en Pachuca ante el Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, Rafael Lucas por su sobrino Porfirio Zapata, contra los procedimientos del Gefe político de Mexhtlan que segun la ley llamada de salteadores y plagarios juzgó á Zapata con el último carácter, condenándolo á muerte, cuyos procedimientos en concepto del promovente, violan en la persona de su representado las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 18 de la Constitución federal, porque Zapata no cometió el delito de robo ni de plagio, y ademas, no tiene la edad requerida para poder imponérsele la pena de muerte, pues no cuenta diez y siete años de edad.—Vistas las constancias de autos, y considerando que segun ellas, el amparo pedido solo era de concederse contra la pena capital, por el fundamento justificado de la menor edad de Zapata; y que en virtud de haberse indultado á ese reo de la pena reforida, conmutándosele en la de ocho años de presidio, ya no es de otorgarse ese amparo. Por lo expuesto, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: Se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito del Estado de Hidalgo, pronunciada en Pachuca á 9 de Julio último, declarándose: que la justicia de la Union no ampara ni protege á Porfirio Zapata contra la pena de ocho años de presidio que está condenado á sufrir.

Devuelvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision acompañándole testimonio de esta sentencia pa-

TOMO IV.—PARTE II.

ra los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*Pedro Ortaiz*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Auza*.—*Luis Velázquez*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 11 de 1873.—*Agustín Peralta*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por los CC. José Ortiz de Rosas, José María Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, contra el veredicto del Jurado de imprenta que los juzgó, y contra el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violacion de garantías.

PRIMER PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que la suspensión del acto reclamado en los recursos de amparo debe otorgarse, siempre que consumado ese acto sea irremediable, y cuando de su continuacion resultan perjuicios irreparables al quejoso. En el caso presente los CC. José Ortiz de Rosas, José María Morgado, Luis Vega, Joaquín Sarabia y Rafael M. Conde se quejan de que acusados por abuso de la libertad de imprenta fueron reducidos á prision, siendo así que esta solo tiene lugar por delito que merezca pena corporal segun el artículo diez y ocho de la Constitución, y las penas que impone la ley

de 31 de Enero de 1868 no tienen esa calidad; y de que habiendo sido aprehendidos durante la noche del 19 y mañana del 20 del actual, permanecen detenidos sin que se haya proveído auto de formal prision, contra el texto expreso del artículo diez y nueve de la Constitución, según el que ninguna detención puede exceder del término de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prision, y los demás requisitos establecidos por la ley.

Del informe rendido por el C. Presidente del Ayuntamiento aparece comprobado ya, que no se ha dictado ese auto para justificar la prision de los quejosos, y que ha transcurrido el término legal para el efecto; y aunque ese funcionario pretende que no es la autoridad ejecutora del acto reclamado, porque no tiene jurisdicción sobre los detenidos, y dice que el veredicto del jurado de calificación equivale á la declaración de formal prision, y que en virtud de su auto de suspensión, este Juzgado y no otra autoridad violó la garantía invocada en este recurso, sus asertos carecen de fundamento legal. Por el auto de 24 del presente que obra á fojas cinco, este Juzgado declaró que no ha suspendido sino la reunión del jurado de sentencia, el veredicto del jurado de calificación que tiene que limitarse á declarar si la acusación es ó no fundada, conforme al artículo veinte de la ley orgánica de imprenta, no puede servir en ningún caso para justificar la prision, pues no establece la calidad ni importancia de la pena que deba imponerse, y conforme al artículo diez y ocho de la misma ley, al Presidente del Ayuntamiento corresponde ordenar la detención ó exigir fianza de estar á derecho; según el artículo cuarenta y uno ninguna otra autoridad fuera del Presidente del Ayuntamiento y los Jurados, puede intervenir en asuntos de imprenta y las atribuciones de los Jurados están limitadas á calificar el impreso é imponer la pena, y una vez disuelto el Jurado, nada tienen

que hacer sus individuos que por otra parte son irresponsables.

Pero limitándome al punto de suspensión, el único objeto de la detención es asegurar la persona de los reos para sujetarlos á la pena que deba imponérseles ó para impedir que delinquean, la ley orgánica citada manda expresamente que se admita la fianza de estar á derecho, y el artículo 19 de la Constitución, establece que el solo lapso del término que no puede exceder la detención, constituye responsables á la autoridad que la ordena ó consiente, y á los agentes, ministros, alcaides ó carceleros que la ejecuten, y siendo irreparables los perjuicios que ocasiona la detención arbitraria.

El Promotor pide que se dicte la suspensión del acto reclamado, conforme al artículo 69 de la ley de 20 de Enero de 1869, mandando que se ponga á los quejosos en libertad, previa fianza de estar á derecho, y que se pida al C. Presidente del Ayuntamiento, el informe con justificación prevenido por el artículo 99 de la misma ley.

Otro sí digo: que se mande reponer con el correspondiente, el papel que ocupa este pedimento. Cuernavaca, Junio 26 de 1873.
N. Medina.—Rúbrica.

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que los CC. José Ortiz de Rosas, José Morgado, Luis Vega, Joaquín Sarabia y Rafael M. Conde, presentaron escrito con fecha 21 del actual, quejándose de haberse violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos trece, catorce y veinte de la Constitución de la República, con el hecho de haber sido juzgados por un jurado de imprenta, cuando antes se les había consignado por la Gefatura Política de este Distrito al Juzgado segundo de primera instancia, como circu-

ladores de un impreso anónimo, contrario al orden público y en que se ataca la vida privada del ciudadano Gobernador del Estado, sin que se les citara ni oyera en defensa ante el jurado. Se mandó suspender la reunion del jurado de sentencia, conforme á la petición de los quejosos y con arreglo al artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869, y en su informe con justificación, dice el ciudadano presidente del Ayuntamiento, que la insaculacion de los jurados se hizo con estricta sujecion á la ley, que esta no dá facultades al ayuntamiento para calificar las personas designadas en el sorteo; que tampoco está prevenido que se cite á los acusados, y que el recurso es improcedente por tratarse de un negocio judicial conforme al artículo octavo de la ley de 20 de Enero.

El artículo trece de la Constitucion establece: «En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales,» y si bien conforme al artículo sétimo, los delitos de imprenta deben ser juzgados por un jurado que califique el hecho, y otro que aplique la pena, la ley ha marcado con entera claridad cuales son los delitos de imprenta sujetos á fuero especial, y no está comprendida entre ellos la circulacion ó expendio de impresos denunciabiles ó anónimos. Además, el artículo treinta y cuatro de la ley de 31 de Enero de 1868, previene: que en el caso de que no comparezca el responsable, se le juzgará con arreglo á las leyes comunes; y el artículo cuarenta y dos de la misma ley, castiga con una multa de diez á quinientos pesos ó prision de quince dias á un año, la supresion en los impresos de la oficina tipográfica en que se publicaron, del año de la impresion y del nombre del responsable, penas que deben imponerse gubernativamente. Por consiguiente, en nuestro caso debió juzgarse al autor del impreso, con arreglo á las leyes comunes, ó imponerse gubernativamente al propietario de la imprenta donde se publicó la multa ó prision del artícu-

lo cuarenta y dos, y la sujecion de los quejosos al tribunal especial que solo debe conocer de los delitos de imprenta, viola la prohibicion del artículo trece de la Constitucion. Además, el hecho de atribuir el conocimiento de un negocio comun á Tribunales especiales, y la declaracion de culpabilidad hecha por el jurado en nuestro caso, viola tambien la garantía que otorga el artículo catorce de la misma Constitucion, porque segun este, nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes exactamente aplicadas al hecho por el Tribunal que previamente haya establecido la ley. La de 31 de Enero antes citada, se refiere solo á los autores y responsables de impresos, y como el mere hecho de tener los quejosos un ejemplar ó de expender y distribuir el libelo denunciado, hecho que terminantemente niegan, no los constituye autores ni responsables como tales, sino que cuando mas, serian encubridores ó cómplices, sujetos al fuero comun, no eran los jurados el tribunal previamente establecido para juzgarles, ni condenándoles aplicaba exactamente la ley. Por último, la fraccion quinta del artículo veinte de la Constitucion, establece como garantía que debe gozar el acusado en todo juicio criminal, la de que se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos, segun su voluntad. Son juicios criminales los de imprenta, porque en ellos se persigue y castiga un delito, y es indudable en mi concepto que debe tener lugar la defensa ante los dos jurados, porque si el primero califica el hecho declarándolo punible y esa declaracion es inapelable, seria incompleta la defensa solo ante el segundo jurado que debe limitarse á imponer la pena, y en ningun caso puede absolver, y porque el artículo veintisiete de la ley de 31 de Enero que es la orgánica vigente, establece: «El juicio será público, pudiendo asistir para su defensa el acusado por sí ó por apoderado, y el acusador sosteniendo la denuncia,» y no se comprende el apoyo de la denuncia ante

el segundo jurado si ya se declara fundada por el primero, los términos del artículo son generales y parecen referirse tanto al juicio de calificación como al de sentencia, de la misma manera que se especifican los dos juicios en el artículo siguiente, como fundamentalmente lo hacen valer los quejosos. El Sr. Castillo Velasco en sus apuntamientos de derecho constitucional, hablando de la fracción quinta del artículo veinte, dice: [página 58] «Esta garantía es tan amplia, que los jueces deben ser muy mirados en sus actos para no restringirla, por mas que su práctica choque con las añejas prácticas de la administración de justicia en el ramo criminal;» y sin embargo, de que comentando la ley orgánica de imprenta, dice que no exige la citación del responsable ó autor del impreso denunciado; presentando la costumbre contraria y el caso de la resolución de un jurado de calificación, absteniéndose de aplicar la ley por la falta de citación previa al responsable, si la ley es incompleta por su vacío en este punto ó por que solo permita como admisible el requisito de defensa que la Constitución establezca como indispensable; la práctica constante ha sido llamar al acusado ante el primer jurado, para que se defienda, y es fuera de duda que de no hacerlo así se viola la garantía invocada en este recurso. Se pide por la autoridad ejecutora que se deniegue el amparo, porque segun el artículo octavo de la ley de 20 de Enero de 69 no procede en los negocios judiciales; pero además de que ese artículo no puede derogar el ciento uno de la Constitución, que establece el recurso de amparo contra los actos de cualquiera autoridad, las garantías invocadas en el presente caso solo tienen lugar en asuntos judiciales y seria necesario admitir que esas garantías habían sido suprimidas para que pudiera desecharse el recurso.

Por lo que el promotor pide se declare que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos en el goce de las garantías que otorgan los artículos trece, catorce

y veinte, fracción quinta de la Constitución contra el juicio del jurado de calificación á que fueron sometidos.

Cuernavaca. Junio 30 de 1873.—*Nicolás Medina*.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. Cuernavaca, Julio 2 de 1873.—*José Anastasio Ireyo*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Julio 2 de 1873. Visto este juicio promovido por los CC. José Ortiz de Rosas, José Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, pidiendo amparo contra el veredicto del jurado de calificación que los declaró culpables del delito de imprenta por el que la gefatura política los consignó al Juzgado segundo de primera instancia, quien inhiviéndose de conocer sobre ese asunto los puso á disposición del Presidente del Ayuntamiento; y contra esta Corporación por sus actos irregulares en la formación del jurado; que á esto dió origen haber circulado en esta Ciudad despues de la llegada de la diligencia del dia 18 último, unos impresos en que se incitaba al público á la rebelion y se insultaba al gobierno y legislatura del Estado, suponiendo á los quejosos cómplices en la referida circulacion, cuya culpabilidad declina; que el Presidente del Ayuntamiento á media noche los pasó del cuartel en que la gefatura los habia puesto detenidos al cuerpo de guardia de la cárcel; que al dia siguiente el Ayuntamiento hizo la insaculacion de los jurados, saliendo designados para formar el que debia calificar el impreso, dos diputados, un dependiente de otro diputado, cuatro empleados del gobierno y dos particulares y sin dar aviso á los detenidos para que asistiesen al juicio ó enviasen defensor, antes bien se les mantuvo incomunicados hasta despues que el jurado reunido sin su noticia los declaró culpables; con cuyos hechos dicen habiáseles violado

las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 20 de la Constitución federal. Que pedido informe á solo el Ayuntamiento, por no ser acoquible que el jurado se hubiese reunido para informar á su vez, de lo que el Juzgado tenía previa seguridad, informó el presidente de aquella Corporación que ni él ni esta tenían facultades para calificar las personas designadas en el sorteo y que no se avisó á los detenidos la reunión del jurado para que se hubiesen defendido, por no prevenirlo el artículo 20 de la ley de 31 de Enero de 1868. Visto el pedimento del Ministerio público, la citación para definitiva y demas constancias del expediente;

Considerando: que el impreso, motivo de estas quejas, si es anónimo como se dice sin designar imprenta, y haber venido de México por la diligencia del 18, debió denunciarse en el lugar en que se publicó (artículo 9 de la ley citada) y allí entablarse el juicio respectivo (artículo 36 de la misma); y no habiéndose hecho así, se infringió el artículo 14 constitucional, sometiendo á los detenidos á un jurado que en tal caso no era el competente, ni establecido previamente por la ley; que si dicho impreso como anónimo ni tenía firma responsable, ni imprenta conocida, el conocimiento de estos delitos debió sugetarse á las leyes comunes y no á las especiales del jurado, (artículo 34), por lo que con esto se ha infringido el artículo 13 constitucional invocado por los quejosos; que examinando el impreso, debió el jurado declarar solamente si la acusación era ó no fundada (artículo 20 citado). y no que los detenidos eran culpables del delito que se acusaba, porque esto es diferente de aquello; que tal declaración de culpabilidad por suponerse á los detenidos circuladores del impreso, sobre la irregularidad que envuelve, no importa, como ha querido sostenerse, un auto motivado de prisión, ni los artículos 18 y 32 de la ley citada hablan de otra cosa que de detención, y solo los artículos 6 y 7 señalan la prisión como pena que deberá imponer en

sus casos el jurado de sentencia (artículo 28 de la misma), lo que comprueba no poderse declarar bien presos á los acusados por el jurado de calificación; que la simple tenencia de un impreso injurioso y subversivo y aun la manifestación de él á otras personas, no lo designa la ley de imprenta como delito, pues en caso de serlo, sería común, y sus jueces, los ordinarios y no el jurado; que aunque el artículo 20 no expresa que se oiga en defensa á los acusados, como lo hace el artículo 27, sí lo previene la fracción quinta del artículo también 20 de la Constitución federal, y por eso nunca se ha omitido el cumplimiento de esta prescripción en ningún jurado de calificación de los innumerables que han ocurrido en México, como lo publican siempre los periódicos y es por lo mismo bien sabido de todos. Por lo que no habiéndose oído en defensa á los que promovieron este juicio, con ello se les ha violado la garantía de dicho artículo 20 constitucional.

Por todo lo cual, se declara: Primero: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á los CC. José Ortiz de Rosas, José María Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, por haberse violado en sus personas con los procedimientos referidos las garantías de los artículos 13, 14 y 20 del Pacto federal, así como la del 19 del mismo, por lo mucho que se ha prolongado la detención en que se les ha tenido, á pesar de la suspensión de ella decretada por este Juzgado. Segundo: Hágase saber al Ministerio público y á los interesados; publicándose la sentencia en la forma acostumbrada y remitiéndose las actuaciones originales á la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como las del incidente relativo, y prevengase á los mismos interesados repongan con el papel del sello tercero el del quinto empleado en este juicio, pagando también en papel el último suplido por este Juzgado. Así definitivamente juzgando lo mandó y firmó el C. Lic. Mariano Sansalvador, Juez interino de Dis-

trito del Estado de Morelos.—Doy fé.—*Mariano Sansalvador*.—Rúbrica.—*José Anastasio Rego*, secretario.—Rúbrica.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Julio 2 de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo que con fecha 21 de Junio último promovieron en la ciudad de Cuernavaca, ante el Juez de Distrito del Estado de Morelos, José Ortiz de Rosas, José Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael M. Conde, contra el veredicto de un jurado de imprenta y procedimientos del Ayuntamiento de dicha Ciudad que, en concepto de los promoventes, violan en su persona las garantías otorgadas por los artículos 13, 14, 19 y 20 de la Constitución federal; porque afirman se les ha juzgado como responsables de un impreso en que se ataca el orden público y se ofende al Gobernador del Estado, impreso que no se reimprimió en aquella Ciudad, de que ellos no son los autores ni se les debió aplicar la ley de imprenta; ni debiendo aplicárseles se les procesó debidamente, y por haber durado su detención mas del tiempo debido.—Vistas las constancias de autos, y teniendo en consideración la sentencia del Juez de Distrito, en la que se concede el amparo á los quejosos, por cuanto á que primero: imputándose á éstos el cargo de circuladores del impreso referido y ser este anónimo, sin la constancia del lugar de la impresión y de la imprenta, el procedimiento judicial practicado, no es el legal, así como el veredicto del jurado que pasando de la calificación de responsabilidad, á la de culpabilidad, se pronunció sin la defensa correspondiente, y segundo porque á los acusados se les ha detenido en prisión mas del término debido, estando solo en suspenso con calidad de provisional esa de-

tención.—Por los fundamentos expuestos, que demuestran la violación de las garantías individuales reclamadas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve: Se confirma la sentencia del Juez de Distrito del Estado de Morelos, pronunciada á 2 de Julio próximo pasado, declarándose: que la Justicia de la Unión ampara y protege á José Ortiz y Rosas, José Morgado, Joaquín Sarabia, Luis Vega y Rafael Conde contra los actos que originaron el presente recurso de amparo.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Pedro Ogazón*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*José Arteaga*.—*Pedro Ordaz*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*S. Guzmán*.—*L. Velasquez*.—*José García Ramírez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 18 de Agosto de 1873.—*Lic. Agustín Peralta* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por Francisco Chavez contra la sentencia ejecutoria que lo condenó á la pena de muerte por el delito de plagio.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que Francisco Chavez promovió en 15 de Abril del pre-